

## 1. Derechos Civiles y Políticos

Una de las problemáticas que más afecta a la población salvadoreña es la inseguridad que se manifiesta a través de la **criminalidad y la violencia**. Al respecto, la PDDH ha destacado la importancia de atender prioritariamente a la víctimas de la violencia y el delito, fortaleciendo los Programas de Protección existentes y creando protocolos aplicables en los procesos administrativos y judiciales que incluyan criterios de trato humano y compasivo, además de establecer medidas en orden a favorecer su acceso a medidas de reparación integrales a causa del daño sufrido.

De manera particular, el Estado salvadoreño tiene la obligación de prevenir, disuadir y controlar la delincuencia y la violencia, además de realizar investigaciones adecuadas que lleven a la sanción de los responsables, evitando la impunidad de las acciones que afectan los derechos humanos relacionados con la seguridad ciudadana. De igual forma, debe garantizar y proteger los derechos de quienes integran la Policía Nacional Civil, proporcionando formación adecuada, infraestructura y equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus labores institucionales.

Asimismo, la implementación de políticas públicas, planes estratégicos o cualquier acción relacionada con la seguridad ciudadana debe ser sustentable y demanda la búsqueda de consensos políticos y sociales, a la vez de estar necesariamente sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación.

Con relación a los **derechos humanos de las personas privadas de libertad**, persisten situaciones de especial gravedad que impiden la readaptación social y conducen a la violación de otros derechos básicos. En ese sentido, la primera obligación del Estado, es ejercer un control efectivo en la seguridad interna de los centros penitenciarios, asegurando además registros completos, organizados y confiables en el ingreso de personas. De igual forma, debe mantenerse un control judicial pronto y efectivo como garantía fundamental de los derechos a la vida y la integridad personal de las personas detenidas, implementando además programas de trabajo, estudio y otros servicios necesarios para que las personas privadas de libertad puedan tener opción a un proyecto de vida digna.

En cuanto a la **memoria histórica**, continúa pendiente la garantía del derecho a la verdad en los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. De manera particular, sigue siendo un desafío la investigación adecuada para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y adoptar procesos de reparación integral para las víctimas, dotando del apoyo político, presupuestario e institucional efectivo para garantizar sus derechos.

De igual manera, es imprescindible que el Estado salvadoreño adopte las medidas necesarias para garantizar la colaboración del Ministerio de la Defensa en relación a la desclasificación de documentación y provisión de información en el marco de la solicitud presentada por las organizaciones sociales y familiares de víctimas en los casos de las masacres de Angulo y Tenango y Guadalupe.

Asimismo, es necesario implementar procesos de reflexión y “memoralización” acerca de las graves violaciones a derechos humanos y la dignificación de las víctimas, evitando aquellas medidas destinadas a rendir homenaje y exaltación a las personas señaladas como violadoras de derechos humanos durante el conflicto armado.

En lo concerniente a **derechos políticos**, se han realizado diversas reformas legislativas y medidas administrativas que han generado modificaciones al sistema electoral, tales como las candidaturas no partidarias, la lista cerrada y desbloqueada y la modalidad del voto por rostros. Se han aprobado también nuevos cuerpos legales como el Código Electoral, Ley de Partidos Políticos, Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones Presidenciales y la reforma de los Concejos Municipales Pluripartidarios. Sin embargo, aún representa un desafío importante la adopción de medidas que garanticen la efectiva participación política y pública de grupos en situación de vulnerabilidad, para garantizar su presencia y opinión en todos los espacios concernientes a sus derechos.

## **2. Derechos económicos, sociales y culturales**

Sobre el **derecho a un nivel de vida adecuado**, en El Salvador la pobreza, desigualdad y exclusión social continúan siendo los principales obstáculos para avanzar hacia mejores niveles de desarrollo humano. Por ello, esta Procuraduría ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de que el país avance en la medición y el abordaje de la pobreza desde un enfoque estructural, dado el carácter multidimensional del fenómeno.

Por otra parte, se reconocen los esfuerzos gubernamentales hechos por medio del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) que contribuyen a paliar la crítica situación que enfrentan las familias empobrecidas y en situación de vulnerabilidad, el cual comprende programas como Comunidades Solidarias; Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares; Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), entre otros; sin embargo, también se reconoce la necesidad de avanzar en la definición de una política integral, articulada con la política económica, con la que se supere el enfoque compensatorio y asistencialista.

En cuanto al **derecho a una alimentación adecuada**, continua pendiente la discusión del Anteproyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional; en la Asamblea Legislativa.

Ante ello, la PDDH ha reiterado su preocupación por la falta de prioridad conferida por el Estado salvadoreño a la defensa y protección de la agro-biodiversidad, y la ausencia de políticas agropecuarias tendientes a una reconversión sustentable de los procesos productivos.

En lo relativo al **derecho a la salud**, esta Procuraduría ha señalado su satisfacción con las acciones emprendidas en el marco de la “Reforma de Salud”<sup>1</sup>, principalmente en cuanto al

---

<sup>1</sup> La reforma cuenta con ocho ejes: a) construcción de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud (RIISS); b) recursos humanos en salud como piedra angular del sistema; c) respuesta a la demanda de medicamentos y vacunas; d) instalación del Foro Nacional de Salud; e) construcción de un Sistema Nacional de Emergencias Médicas; f) desarrollo de un Sistema Único de Información Estratégica; g) articulación progresiva con el ISSS y

aumento de la asignación presupuestaria en el ramo de la salud<sup>2</sup>, las mejoras en el acceso y la cobertura, la contratación de personal en salud y la reconstrucción de la red pública hospitalaria. De forma particular, la PDDH ha reconocido como una medida acertada la aprobación de la Ley de Medicamentos, así como el desempeño de la Dirección Nacional de Medicamentos en cuanto a la regulación y vigilancia de los precios de los medicamentos en el país.

Sin embargo, a pesar de los avances y los resultados positivos registrados, esta Procuraduría ha considerado la necesidad de adoptar decisiones orientadas a incrementar considerablemente la inversión pública en salud, unificar el sistema público, revertir la mercantilización de la salud, vigilar y controlar de forma estricta la calidad y calidez en los servicios, y garantizar la sanción y reparación de violaciones al derecho a la salud en casos de negligencia médica y mala praxis.

En lo referente al **derecho a la educación**, en los últimos años el Estado salvadoreño ha adoptado medidas orientadas a facilitar el acceso a la educación para las familias de bajos ingresos; sin embargo el sistema educativo continúa presentando muchas deficiencias que se manifiestan en los insuficientes niveles de inversión, la baja cobertura escolar; la dificultad de reducir la deserción escolar; baja calidad de la educación; precarias condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, entre otros.

Por otra parte, para el 2015 hay una reducción de \$140 millones en el presupuesto en educación, lo cual pone en riesgo no solo la calidad, el acceso y las mejoras en la infraestructura, sino también en las revisiones salariales de maestros y maestras. Dada la poca inversión en educación, las tasas de cobertura escolar son muy bajas; en el nivel inicial, es del 1.34%; parvularia, 52.36%; secundaria (desde 7° grado hasta finalizar bachillerato), 60.44%<sup>3</sup>; y a nivel universitario el 14.08% para el año 2012<sup>4</sup>.

En cuanto al cumplimiento del **derecho al trabajo y el respeto de las libertades sindicales**, la PDDH ha señalado que son áreas que el Estado debe atender de manera urgente, con un abordaje que requiere la implementación de medidas de carácter estructural orientadas a generar más empleos de calidad, elevar salarios, sancionar y reparar las violaciones a la legislación laboral y garantizar un entorno adecuado para el desarrollo de la actividad sindical.

Esta Procuraduría también ha insistido en que uno de los derechos que ha recibido menor atención ha sido el **derecho a la vivienda**. La persistencia de un alto déficit habitacional refleja que las iniciativas impulsadas durante el periodo no han sido efectivas y, hasta la fecha, no se han generado propuestas integrales ni novedosas al respecto. Por tanto, es necesaria la realización de programas dirigidos a otorgar seguridad de la tenencia, incluyendo el acceso al

---

otros prestadores públicos de salud; y f) creación del Instituto Nacional de Salud y g) fortalecimiento de la Red de Laboratorios.

<sup>2</sup> De acuerdo a los reportes oficiales, entre 2008 y 2013 el presupuesto del MINSAL aumentó del 1.8 % del PIB al 2.6% del PIB. Ver MINSAL. *Rendición de cuentas 2013-2014*. San Salvador, 2013, P. 3.

<sup>3</sup> UNICEF: Informe de situación de la niñez y adolescencia en El Salvador, a 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, noviembre de 2014.

<sup>4</sup> Opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en torno a que El Salvador se convierta en Estado Parte de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, agosto de 2014, p. 4.

crédito y subsidios para familias de bajos ingresos y los miembros de grupos más desfavorecidos; así como adecuar la legislación sobre los desalojos forzosos de manera que cumpla con los estándares y directrices internacionales.

### **3. Derechos ambientales**

A pesar de los avances gubernamentales plasmados en estrategias, políticas y planes que reconocen la problemática ambiental existente, es necesario iniciar acciones para resolver la contaminación y degradación de los bienes naturales, la vulnerabilidad socio-ambiental, las prácticas agrícolas insostenibles basadas en el uso de agroquímicos, así como a las medidas de reparación de los daños producidos al ambiente.

**Agrotóxicos:** Durante este año se vio con preocupación la contaminación por tóxicos de uso agrícola en una bodega abandonada que afectaba a comunidades de los municipios de Olocuilta y San Luis Talpa, y en donde se registra un gran número de personas con enfermedad renal crónica y muertes por esta causa. Recientemente fueron retirados los desechos tóxicos del lugar para su tratamiento y disposición final.

Sin embargo, a la PDDH le resulta preocupante la situación de la contaminación por químicos de uso agrícola en el país, que aún no ha sido cuantificada y se siguen utilizando varios agroquímicos dañinos para la salud y el ambiente, pese a que el 5 de septiembre de 2013 la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo N°473 conteniendo las “Reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para uso Agrícola”, que entre otros aspectos contenía la prohibición expresa de 53 ingredientes activos y otros compuestos de plaguicidas, en su grado técnico o como producto formulado, así como una disposición que señala que “se prohíbe el uso de los plaguicidas y fertilizantes que contengan metales pesados y metaloides en su formulación”. Dicha reforma fue observada por el Presidente de la República de ese entonces y devuelta a la Asamblea Legislativa, sin que a la fecha hayan sido retomadas en un estudio.

**Problemas con desechos sólidos:** Estos problemas se dan en varios municipios poniendo en riesgo la salud de la población, demostrando que es un tema que debe abordarse desde el Gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que su solución excede las capacidades de los gobiernos locales.

**Proyectos con impacto transfronterizo:** Hay varios de estos proyectos que amenazan los bienes hídricos salvadoreños al encontrarse en cuencas hidrográficas compartidas con los países vecinos. Es así que existe la amenaza del proyecto minero “Cerro Blanco” en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala. Además, hay otros proyectos extractivos tanto en Guatemala como en Honduras que traerían repercusiones en nuestros recursos hídricos, que podrían conllevar a afectaciones para la vida de los habitantes de El Salvador. La preocupación de PDDH se relaciona con la conflictividad que puede generar este tipo de proyectos y la necesidad de la acción diplomática.

**Consultas locales sobre los proyectos de extracción de minería metálica como forma de participación democrática en materia ambiental:** En septiembre y noviembre del presente

año, los concejos municipales de San José Las Flores y San Isidro Labrador, Chalatenango, convocaron a consulta popular con relación a este tema. En ambos casos, los habitantes de dichas localidades se pronunciaron en contra de proyectos de extracción minera metálica por considerar que atentan con el derecho al medio ambiente, vida digna, salud y alimentación, entre otros. La PDDH felicita esta acción y estima que dicha acción debe alentar a la Asamblea Legislativa para que, de forma definitiva, prohíba estas prácticas por medio de una ley de extracción minera a fin de evitar riesgos ambientales y la contaminación en poblados enteros.

En cuanto a la protección y conservación de bienes hídricos, esta Procuraduría ha considerado imperioso que se proceda a la ratificación de la reforma constitucional relativa al **derecho al agua**.

Además, aún existen importantes retos en cuanto a evitar agravar las condiciones de vulnerabilidad de la población, la ocurrencia de desastres y las violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, es urgente contar con un Plan Nacional de Cambio Climático y políticas públicas que integre el tema climático y retomen los estándares internacionales en la materia; así mismo, diseñar un sistema de información sobre los impactos de cambio climático, el fortalecimiento de las capacidades humanas y la participación comunitaria en todos los niveles.

#### **4. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud**

Esta Procuraduría ha expresado su satisfacción por la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, la instalación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el despliegue territorial de las Juntas de Protección y la aprobación de la política nacional. Asimismo, ha sido un avance la aprobación de la Ley General de Juventud y la respectiva Política General de la Juventud, así como el establecimiento del Instituto Nacional de la Juventud.

Sin embargo, el Estado salvadoreño aun tiene importantes desafíos en relación al cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la juventud. Al respecto y ante el problema de la **violencia**, en el país 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren violencia en sus hogares; el abuso sexual se incrementó en los últimos 5 años, así como los embarazos en adolescentes.

De acuerdo al informe de UNICEF 2013, la tasa de homicidios coloca a El Salvador como el cuarto país más violento de América Latina. De los 2,499 asesinatos reportados por Medicina Legal en el 2013, el 16% de estos fueron de niñas, niños y adolescentes.

**Salud:** Durante el segundo y tercer trimestre de 2014 se constató que las vacunas del cuadro básico estipuladas en la Ley de Vacunas no estaban siendo aplicadas en el país, en clara violación al derecho a la salud de la primera infancia.

**Migración:** La migración irregular de niñas, niños y adolescentes no acompañados motivada por diversas causas, entre las que está la reunificación familiar, alcanzó cifras que han obligado a las autoridades de Estados Unidos reconocer que se trata de una “situación

humanitaria urgente”. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo un número récord de 47,017 niños migrantes no acompañados a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. Esta cifra representa un aumento de casi el 50% respecto del año pasado.

**Discriminación contra niños indígenas, niños con discapacidad y las niñas:** La población infantil con discapacidad vive condiciones muy adversas en el país. No existe un censo confiable de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, por ello se dificulta la elaboración de estrategias para su protección integral. La misma falta de un censo confiable sucede en el caso de niñas, niños y adolescentes indígenas o con ascendencia indígena, por lo que se encuentran invisibilizados y sufren discriminación en su comunidad y en la escuela al exponer su pertenencia a pueblos originarios, por lo que prefieren ocultar sus raíces ancestrales<sup>5</sup>.

**Justicia penal juvenil:** las condiciones en las que las personas adolescentes cumplen la medida de internamiento no garantizan la generación de condiciones personales que hagan posible la inclusión de dichas personas en la sociedad. Los centros de internamiento se caracterizan por no disponer de bibliotecas, ludotecas, materiales didácticos ni cuadernos; insuficiente personal docente en los Centros de Inserción; los jóvenes en conflicto con la ley sufren discriminación en centros educativos públicos y privados cuando gozan de medidas en medio abierto.

Las condiciones de las personas adolescentes en las bartolinas policiales, debido a la inexistencia de centros de resguardo que debe crear y administrar el ISNA, son deplorables, no se les permite el contacto familiar y a veces no se respeta la separación que debe existir con las personas adultas, violando así su dignidad humana.

## **5. Derechos humanos de las mujeres**

En los últimos años, El Salvador ha dado avances significativos relacionados con la adopción de normativa especial y políticas que protegen los derechos de las mujeres <sup>6</sup> Además, el país cuenta con un Protocolo de Actuación para la Investigación del Femicidio en El Salvador<sup>7</sup>; asimismo, en áreas como salud con la aprobación de la Política de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) del MINSAL y en Educación con la revisión de la currícula para la introducción de la perspectiva de SSR, se han sentado las bases para articular acciones conjuntas. El programa gubernamental “Ciudad Mujer”, que brinda servicios especializados en salud sexual y reproductiva, atención integral a la violencia de género, empoderamiento económico y promoción de sus derechos, ha iniciado la aplicación de un modelo de atención integral<sup>8</sup> que favorece a las mujeres con mayores niveles de vulnerabilidad.

---

<sup>5</sup> Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 2013, p. 57.

<sup>6</sup> Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2010); Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (2011); Política Nacional de las Mujeres (2011); Política Nacional contra la Trata de Personas (2012); Política Nacional de Equidad e Igualdad para las Mujeres salvadoreñas (2012) y Política Nacional para el Acceso a una Vida libre de Violencia (2013)

<sup>7</sup> Aprobado en el año 2012 e implementado desde la Fiscalía General de la República.

<sup>8</sup> En total se cuenta con la intervención de 14 instituciones al interior de Ciudad Mujer, tales como la Secretaría de Inclusión Social (SIS); el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); Ministerio de Salud (MINSAL); Policía Nacional Civil (PNC); Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP); Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

No obstante, los importantes avances en el presente quinquenio; la violencia, la discriminación y la desigualdad de género, continúan afectando significativamente la vida de las mujeres.

En el ámbito de la seguridad social, para el primer trimestre de 2014, la Policía Nacional Civil (PNC) registró los casos de 60 mujeres asesinadas, la mayoría jóvenes de 18 a 30 años. Estos datos revelan que aun es necesario profundizar los esfuerzos institucionales en orden a eliminar los patrones y estereotipos culturales discriminatorios y, en general, cualquier obstáculo que impida la correcta aplicación del marco normativo existente y la eficaz ejecución de las políticas y programas. Dichos esfuerzos deben ser respaldados por recursos financieros adecuados, así como por el establecimiento de un sistema de información que permita analizar y tomar las decisiones más adecuadas para mejorar la situación de las mujeres y niñas a nivel nacional.

Para esta Procuraduría, uno de los aspectos que requiere mayor atención es el vínculo crítico que existe entre el acceso a una adecuada protección judicial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es, por tanto, una obligación del Estado, y de manera primordial del Órgano Judicial y del Ministerio Público, dar una respuesta idónea, inmediata y efectiva frente a los actos de violencia contra las mujeres, actuar con la debida diligencia para investigar los hechos cometidos, lograr la sanción de los responsables y una adecuada reparación a las víctimas.

Respecto a la participación política de las mujeres, la Ley de Partidos Políticos aprobada en febrero de 2013, obliga a incluir dentro de sus planillas electorales para la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano, y Consejos Municipales, un 30% de participación de mujeres. También contempla sanciones para aquellos partidos políticos que no respeten dicho porcentaje.

Durante la anterior gestión presidencial (2009-2014) únicamente se contó con el 15% de representatividad de las mujeres en las instancias ministeriales. Respecto a los titulares de Superintendencias e Instituciones Autónomas, de un total de 21 instancias, sólo 1 mujer fue nombrada titular. En los cargos de elección popular como diputadas y diputados las mujeres han logrado paulatinamente mejor representación con el 32% de candidaturas en el quinquenio.

Lograr el reconocimiento total de los derechos políticos de las mujeres en un sistema cultural patriarcal, se vuelve más difícil cuando el imaginario colectivo continúe ubicando a este sector en el ámbito privado y bajo la creencia de la superioridad de los hombres hacia las mujeres, de ahí se debe a que las mujeres se les ha concedido manejar cargos de menor valía como las suplencias de la Asamblea Legislativa, regidoras suplentes de los gobiernos locales o de las instituciones autónomas del ejecutivo<sup>9</sup>.

---

(CONAMYPE); Banco de Fomento Agropecuario (BFA); Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); Procuraduría General de la República (PGR); Fiscalía General de la República (FGR); el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

<sup>9</sup> Ibídem.

## 6. Derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad

Con relación a los **derechos de los pueblos indígenas**, esta Procuraduría celebra la aprobación de la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, en la cual se reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas y se faculta al Estado para adoptar políticas que mantengan y desarrollen su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Sin embargo aún continúa pendiente la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre “*Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes*”, y la incorporación en el ordenamiento jurídico de una definición de discriminación racial apegada a los estándares de la Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial.

De igual forma, la PDDH reconoce las afectaciones a los **derechos humanos de la comunidad LGBTI**, de manera particular, los atentados contra el derecho a la vida y la integridad personal, así como la descremación laboral y educativa. En tal sentido, considera impostergable la aprobación de una Ley de Igualdad y No Discriminación que incluya las necesidades de la población LGBTI, así como una Ley de Identidad de Género.

Por otro lado, la PDDH se ha pronunciado a favor de adoptar medidas estatales para la atención y protección de las **personas migrantes**, de manera particular aquellas destinadas a la incorporación familiar, social y laboral de quienes retornan al país. Además, la PDDH ha considerado urgente que se proporcione al Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTE) como organismo creador y rector de estas políticas, los recursos financieros necesarios para que ejecute su mandato y desarrolle las acciones establecidas en su plan estratégico en aras de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

Con relación a los **derechos de las personas con VIH**, uno de los logros más importantes de los últimos años es la baja en la tendencia de la detección tardía de nuevos casos<sup>10</sup>, lo que impacta en un mejor pronóstico en la vida de las personas. Esto es resultado de una serie de factores como el ofrecimiento de la prueba de VIH, mejora en la calidad de los servicios, el programa de transmisión materno infantil, entre otros esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Salud por medio del Programa Nacional de ITS/VIH/Sida.

En relación a los **derechos de las personas adultas mayores**, entre las acciones más significativas se enumeran: 1. *Pensión básica universal*: monto entregado bimensualmente a personas mayores de 70 años o más, que se encuentren en condiciones de pobreza extrema; 2. *Aprendiendo Juntos y Juntas*: alfabetización y capacitación de personas adultas mayores, así como la formación de recursos especializados: desarrollo de tres diplomados en gerontología social.

Finalmente, en relación a los **derechos de las personas con discapacidad** el último quinquenio hemos observado la realización de acciones destinadas a favorecer el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, tales como: a) la recomposición del Pleno del

---

<sup>10</sup> Por ejemplo, en 2009, de 1,587 casos nuevos registrados, en 163 de ellos se detectó VIH avanzado; mientras que en 2013, de 1,440 casos nuevos, 61 correspondían a VIH avanzado. MINSAL. *Informe Nacional de Progreso de en la lucha contra el SIDA*, citado supra.



Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), incrementando el número de representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad e igualarlo al de los representantes de las entidades gubernamentales; b) la reforma del sector salud que incorporó en la actual Política Nacional de Salud una estrategia de “atención integral” a las personas con discapacidad; c) reformas a la Ley de Protección al Consumidor, vigentes desde 2013. Asimismo, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, fue incorporado el enfoque de atención a las personas con discapacidad, aunque no se profundizó en el mismo.

A pesar de lo anterior, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizó observaciones finales<sup>11</sup> sobre aquellos aspectos que consideró relevantes y urgentes de ser atendidos por el Estado para la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad, teniendo hasta finales del año 2017 para su realización. Una de esas observaciones es el retiro de la reserva genérica al instrumento en referencia, que socava internamente la base de derechos humanos y libertades fundamentales que la Convención contempla.

No es posible aproximarnos al modelo de cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad sin contar con un sistema de implementación de la Convención y de supervisión de su observancia, que sea liderado por un ente rector en la materia<sup>12</sup> fortalecido en sus atribuciones y presupuesto, así como con la capacidad de sinergia de todas las instituciones del Estado y la participación inclusiva de las personas con discapacidad.

---

<sup>11</sup> 10ª sesión de trabajo del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 02 al 13 de septiembre de 2013.

<sup>12</sup> A la fecha tal rectoría de la política sobre discapacidad está a cargo del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD).